



Olvidones de la educación

Magdalena Vergara
 IdeaPais



Hace unas semanas el Ministerio de Educación presentó el presupuesto para 2025. El objetivo, planteó el ministro, es garantizar el derecho a la educación, lo cual exige asegurar ciertas condiciones habilitantes para el proceso educativo, como fortalecer la educación pública, mejorar la institucionalidad y los sistemas de financiamiento, y el desarrollo de capacidades de las comunidades educativas.

Para el logro de estos objetivos, se pusieron distintos énfasis. En educación parvularia, avanzar en la obtención de Reconocimiento Oficial, el aumento de cobertura y la equidad del financiamiento. En escolar, fortalecer la educación pública, resguardar las trayectorias para un aprendizaje integral y fortalecer las capacidades institucionales. Y en superior, una fuerte agenda de modernización académica, de gestión, gobernanza y financiamiento.

Sin duda una agenda ambiciosa, que evoca a los otrora dirigentes de las movili-

zaciones estudiantiles. Pero la realidad es otra. El discurso de la universalidad de la educación parece haberse agotado con la gratuidad y la condonación del CAE. Para parvularia y escolar impera la política del pichintún: presupuestos acotados y con bajos niveles de ejecución, que no llegan a la mayoría de los estudiantes. Buen ejemplo de ello es la política de reactivación educativa, que para 2025 disminuiría en un 9,9%, pero que además hasta septiembre, mantiene una ejecución menor al 30%. De los resultados, además, no se habla.

Por su parte, el ministro sigue pensando que las condiciones habilitantes para la educación, están en los grandes proyectos estructurales, y olvida cuestiones indispensables para el día a día de la escuela: hasta el 31 de agosto no se entregaron los útiles escolares, y sin remordimientos suspendieron las clases hasta por cuatro días para las elecciones.

Se trata de un discurso lleno de contradicciones; mientras busca avanzar

en la obtención de reconocimiento oficial de los jardines infantiles asignando un presupuesto que no permite grandes metas, al mismo tiempo tramita un proyecto de ley que busca aplazar en diez años el requisito. Que disminuye los recursos para apoyar la lectoescritura —principal crisis educativa— pero destina cinco mil millones para talleres de

arte, educación física y ciencias en cinco servicios locales. Un gobierno que pregona con la educación pública, pero cuyo fortalecimiento se traduce en un aumento de recursos para la gestión de nueve servicios.

Sin duda, el déficit fiscal exige moderación —como han repetido varias veces—.

Sin embargo, el gobierno de los dirigentes estudiantiles ya hizo su apuesta, y lamentablemente la hizo en la gratuidad y la condonación del CAE (llámese modernización), lejos de la sala de clases y lejos de un sistema equitativo y de calidad, que pone sus fichas en la educación parvularia.

“Para la educación parvularia y escolar impera la política del pichintún: presupuestos acotados y con bajos niveles de ejecución”.